

FLASHES A.S.E.P.

OCTUBRE - 2002

FICHA TECNICA

Diseño y Realización: De la investigación, del cuestionario y de la muestra:
A.S.E.P.

Diseño Muestral: 1.208 personas de uno y otro sexo, de 18 y más años, residentes en España. Muestra aleatoria estratificada por Comunidades Autónomas y estratos de municipios según su número de habitantes. Selección aleatoria de municipios y secciones censales dentro de cada estrato y de cada Comunidad Autónoma. Selección de hogares mediante sistema de rutas aleatorias dentro de cada sección censal. Selección final del entrevistado en cada hogar mediante cuotas de sexo y edad.

Trabajo de Campo: Realizado durante los días 7 al 13 de Octubre de 2.002, mediante encuesta personal en el hogar de cada entrevistado, por la Red de Intercampo, S.A. Supervisión del trabajo de Campo realizado por A.S.E.P.

Proceso de Datos: Diseñado y realizado por A.S.E.P. con "software" propio, elaborado por J.D. Systems.

Análisis e Informe: Diseñado y realizado por A.S.E.P., y terminado el 24 de Octubre 2.002.

**DIRECCION:
JUAN DIEZ NICOLAS**

COPYRIGHT ASEP S.A., 2002. PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, INCLUSO CITANDO LA FUENTE.

"FLASHES"

(OCTUBRE 2002)

Si los indicadores de este mes de octubre apenas se diferencian de los obtenidos el pasado mes de septiembre, en gran medida se debe a que el contexto nacional e internacional tampoco ha variado demasiado. En efecto, el sistema de indicadores ha seguido la tendencia de meses pasados, de manera que casi todos ellos sugieren una creciente insatisfacción con la situación económica nacional y personal presente y una creciente desconfianza respecto a ambas situaciones en el futuro. Como se había anticipado en septiembre y se confirma en los datos de este mes, y como también parece haber confirmado el Banco de España, se están reduciendo el ahorro y el consumo, lo que significa que los españoles comienzan a sentir la crisis cada vez más próxima a sus bolsillos. En estas circunstancias es lógico que la satisfacción con el Gobierno lleve ya tres meses en el nivel de equilibrio, y lo que es sorprendente es que no esté ya por debajo del nivel de equilibrio, probablemente a causa de otros factores políticos que luego se comentarán, y de manera muy especial a la firmeza de la política antiterrorista y en defensa de la unidad de España que lleva el Gobierno.

La incertidumbre, y sobre todo, la desconfianza en la situación económica debería preocupar al Gobierno, pues cuando los ciudadanos pierden su confianza en la situación económica tienden a perderla también en los responsables políticos. En muy pocos años los españoles han visto con asombro cómo las entidades financieras competían unas con otras por ofrecer intereses muy altos por los depósitos en libretas de ahorro, cuentas a plazo e incluso en las cuentas corrientes (durante el primer quinquenio de la década de los '90), y cómo de pronto, debido a la drástica disminución de la inflación y de los tipos de interés interbancario consecuentes con las directrices emanadas del Banco Central Europeo, los intereses por depósitos se esfumaron, al mismo tiempo que aumentaban los gastos y comisiones por toda clase de servicios anteriormente gratuitos. Los pequeños ahorradores, especialmente las personas mayores, una vez que comprobaron que ya no podían vivir de los intereses que anteriormente recibían por sus depósitos, y que generalmente complementaban sus ingresos por pensiones y subsidios de jubilación, incapacidad o paro, y aconsejados con su mejor intención por los responsables de entidades financieras en las que tenían sus cuentas, por familiares, o por amigos, llevaron sus ahorros, que ya "no les rentaban nada", a fondos y planes de pensiones o a fondos de inversión. El que no es un profesional de la Bolsa no pasa el día comprando y vendiendo, sino que coloca sus ahorros a medio

y largo plazo. Así, durante unos años (el segundo quinquenio de la década de los '90) estos pequeños ahorradores vieron crecer, virtualmente por supuesto, el valor de sus ahorros, generalmente sin retirar los beneficios, como suelen hacer los inversores profesionales o los grandes inversores.

Desde estas páginas se criticó la propaganda que en aquellos años hacían algunas entidades de sus planes y fondos de pensiones basándose en el peligro de que “quebrase la Seguridad Social” (!) por el incremento en el número de pensionistas y la reducción del número de personas con empleo que cotizaban a la Seguridad Social. La crítica que aquí se hacía a esa argumentación es que, en el improbable supuesto de que quebrase la Seguridad Social, ello implicaría la quiebra del Estado, y por tanto sería difícil imaginar cómo, en esa situación, las aseguradoras privadas podrían hacer frente a sus compromisos de planes y fondos de pensiones y de jubilación. Por otra parte, en esas fechas ya se podía pronosticar con cierta seguridad que el incremento de inmigrantes redundaría en un incremento de cotizantes a la Seguridad Social, como así ha sido.

En cualquier caso, quienes animados por el crecimiento espectacular de la Bolsa (crecimiento inducido entre otras razones porque la mayor parte de los ahorros en depósitos bancarios fueron trasladados a la Bolsa) invirtieron en ella sus ahorros durante el segundo quinquenio de los años '90, se vieron sorprendidos a principios del nuevo siglo y milenio por una caída espectacular que se llevó sus sueños y ahorros para un futuro económicamente protegido. Como demuestran los datos que se ofrecen en La Actualidad, un 13% de los entrevistados afirman tener inversiones en Bolsa, una proporción importante, teniendo en cuenta que la muestra en que se basa esta investigación es de la población española de 18 y más años, y que los inversores suelen ser solamente los cabezas de familia y/o sus cónyuges, lo que implica que posiblemente más de un millón de hogares (de los aproximadamente siete que hay en España) tienen inversiones en Bolsa. De acuerdo con sus contestaciones, la mayoría solo han tenido hasta ahora pérdidas “virtuales”, puesto que no han vendido, pero la cuestión es cuánto más tiempo podrán resistir perdiendo sin vender.

Los que no trasladaron sus ahorros a la Bolsa lo hicieron a la compra de vivienda, por aquello de que suelen ser inversiones seguras, con revalorizaciones más o menos altas a medio y largo plazo. Pero el auge que ha adquirido el mercado inmobiliario en estos últimos años, atribuible al afloramiento de inmensas cantidades de dinero negro por la llegada del euro, a la falta de intereses bancarios ya comentada, y la muy baja rentabilidad de la Bolsa, podría seguir en estos próximos años el mismo camino de la Bolsa, pues la mayor parte de las viviendas que se han

comprado en estos últimos tres años lo han sido como inversión, y no para ser habitadas por sus compradores, es decir, han sido adquiridas para ser revendidas a precios más altos y a corto plazo (especulación) y en mucha menor medida para ser alquiladas (lo que podría representar una buena solución para los jóvenes que quieren emanciparse). Teniendo en cuenta lo que se ha tratado de exponer anteriormente, no sería extraño que asistiésemos en los próximos años a una espectacular disminución del valor de las viviendas, debido al exceso de oferta, por una parte, y a las presiones gubernamentales por otra (incremento del impuesto por el valor catastral, gravámenes a las viviendas vacías, etc.), al mismo tiempo que volvería a subir la Bolsa (pues a algún sitio tienen que ir los ahorros-inversiones, tanto de los pequeños como de los grandes inversores). Parece como si el pequeño ahorrador estuviese condenado a ser siempre un “perdedor” en beneficio de los que saben y pueden manejar las reglas del mercado y la información económica.

En efecto, cuando los pequeños inversores estaban invirtiendo sus ahorros en Bolsa animados por el crecimiento de una burbuja artificialmente creada por los que saben y entienden, éstos estaban retirando sus beneficios de la Bolsa e invirtiendo en suelo y en la construcción de viviendas. Al producirse el “pinchazo” de la burbuja especulativa de la Bolsa, los pequeños inversores con menor capacidad de resistencia tuvieron que vender con pérdidas, momento que están aprovechando los que saben y entienden para volver a comprar valores bursátiles a precios muy bajos. Otra parte de los pequeños ahorradores-inversores, al comprobar el bajo nivel de la Bolsa, han optado por invertir en la compra de viviendas con la intención de venderlas posteriormente con beneficios, pero la revalorización ha beneficiado obviamente a los que vendían (grandes inversores). Cuando los que han invertido en viviendas con fines más o menos especulativos intenten vender esas viviendas se encontrarán con un mercado que tiene más oferta que demanda, de manera que, una vez más, venderán con menos ganancias de las esperadas o incluso con pérdidas, al tiempo que los grandes inversores estarán nuevamente invirtiendo en Bolsa a precios muy bajos.

Los ciclos parecen repetirse una y otra vez, de manera que siempre que el pequeño inversor recibe la información de que es negocio invertir en algo es porque quienes producen esa información ya habían invertido antes y comienzan a vender retirando beneficios a costa de las inversiones del pequeño inversor. Así, parece más que probable que ya se esté acabando el ciclo favorable para la inversión inmobiliaria y que pronto comenzará un nuevo ciclo favorable a la inversión bursátil.

En cualquier caso, lo que parece evidente es que el ciudadano está desconcertado con la situación económica, lo que le lleva a desconfiar del sistema capitalista en su conjunto. De hecho, toda la justificación del denominado “capitalismo popular” se basa en la confianza, pero si el ciudadano pierde sus ahorros perderá también la confianza en la economía, y si pierde ésta, procurará consumir y no ahorrar (y por tanto no hará posible la inversión). Esto es lo que se percibe en la calle, que no merece la pena ahorrar, y que lo que hay que hacer es consumir. Pero, si el ciudadano tampoco puede consumir de acuerdo con sus deseos, como parece estar ya ocurriendo, no solo de acuerdo con los datos de esta investigación, sino con los precedentes del propio Banco de España en su último informe, entonces se están sentando las bases de un descontento generalizado que pasará la cuenta a los gobernantes de turno, sean del partido que sean. Lo curioso del caso es que, si en el mejor momento del “boom” de la Bolsa muchas empresas estaban absolutamente (y es posible que artificialmente) sobrevaloradas en su cotización, por el denominado “efecto burbuja”, en estos momentos muchas empresas tienen un valor en Bolsa que está absolutamente (y puede que también artificialmente) por debajo de su valor real, de manera que quienes tienen posibilidades de invertir están comprando auténticas “gangas”, mientras que muchos pequeños ahorradores, no pudiendo resistir por más tiempo sin vender, se ven obligados a vender a precio de saldo. Como es habitual, y debido a las grandes diferencias en su capacidad de resistencia, “el pez grande se come al pequeño” una vez más.

Cuando, además de todo lo anterior, los ciudadanos están siendo frecuentemente informados de escándalos financieros y económicos de gran envergadura, reales o supuestos, demostrables o no, en los que están involucrados toda clase de sectores sociales, su descontento crecerá aún más. El escándalo más reciente, el de los fondos del FORCEM para dar cursos de formación para el empleo a los parados y, en general, a todos los que buscan empleo, ha tenido un eco más bien escaso en los medios debido, posiblemente, a que implicaba a sectores sociales muy variados e incluso habitualmente enfrentados, pero unidos por la codicia. En otro orden de cosas, muchos ciudadanos se preguntan por qué todos los municipios, grandes o pequeños, están continuamente embarcados en obras, que duran más de lo que deberían durar, y que en ocasiones vuelven a abrirse a los pocos días de haberse cerrado las anteriores, como sucede en algunas calles y plazas, y es casi inevitable pensar en los ingresos que representan para los ayuntamientos las licencias de obras, y en algunos casos hay quien piensa incluso en cosas peores, como las comisiones o “mordidas”. Con independencia de que posiblemente se generalicen situaciones que son excepcionales, no deja de ser curioso observar la

oleada de vocaciones para ser alcalde o concejal que parece haberse despertado entre los profesionales de la construcción o de la promoción inmobiliaria, como seguramente se podrá verificar en las próximas elecciones municipales. Esta abundancia de “vocaciones” por “servir” a la comunidad ya se puso de manifiesto en las elecciones municipales anteriores, de manera que puede comprobarse que la proporción de alcaldes y concejales que tienen cargos de responsabilidad en empresas constructoras y de promoción inmobiliaria es muy superior a la de otras profesiones, y es solo comparable al incremento de vocaciones en esos mismos dos grupos de profesionales por ser presidentes de clubs de fútbol. Sería deseable que una tesis doctoral explicase las razones de este despertar de vocaciones por ser concejal o alcalde, o presidente de club de fútbol, entre los profesionales de la construcción y de la promoción inmobiliaria.

Pero, sean cuales sean las causas, lo cierto es que desde las elecciones del 2000, que marcaron el momento de mayor satisfacción de los españoles con la situación económica nacional y con la suya personal, así como el momento de mayor confianza en el futuro de ambas, los indicadores que miden satisfacción y confianza han ido disminuyendo de forma continuada, hasta el punto de que ahora se encuentran en los niveles que se observaron alrededor de las elecciones de 1996. Confiemos en que no se alcancen los bajos niveles de confianza y satisfacción que se observaron en 1992, y que representaron el nivel más bajo desde que se inició la realización de los sondeos mensuales ASEP en octubre de 1986.

En el plano político nacional, los datos de esta investigación de octubre se enmarcan en un contexto caracterizado por la retirada del “decretazo” sobre la reforma laboral, la firmeza del Gobierno frente a la escalada nacionalista planteada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, y las conjeturas sobre la “sucesión” de Aznar, y en menor medida por las informaciones relativas al deseo de la oposición socialista por re-abrir el debate sobre la privatización de empresas públicas y el robo de documentos y archivos al asesor del Presidente Aznar.

En lo que respecta a la retirada del “decretazo”, es evidente que, como suele decirse, la decisión del Gobierno ha sorprendido a propios y a extraños. Resulta difícil de explicar que, cuando hasta los Sindicatos (con independencia de sus declaraciones públicas) parecían haber ya asumido y digerido la reforma de la legislación laboral, resignándose a una creciente pérdida de poder social real, y cuando el Gobierno había soportado un desgaste enorme que parece haber provocado incluso un cambio de ministros (en el que al entonces Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales le asignaron sin quererlo el papel de “malo” de la película), el nuevo

Gobierno (pero con el mismo Presidente) haya dado marcha atrás. El cambio de opinión no puede presentarse como consecuencia de una buena disposición al diálogo, pues si había esa disposición la negociación habría debido hacerse antes de que se llevase a cabo la convocatoria de huelga general antes del verano. A no ser que, como se planteaba en alguna de las hipótesis incluidas en los FLASHES de entonces, la elaboración del decretazo fuese un mero instrumento para provocar un enfrentamiento que justificase una remodelación del Gobierno. Pero esa hipótesis se planteaba, y se plantea, como algo tan descabellado que debe ser descartada totalmente por absurda. Otra hipótesis sería la de que el nuevo Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que parece dispuesto a alinearse cuanto antes en la parrilla de salida para la carrera por la sucesión de Aznar, haya exigido esa “baza” para no quedar eliminado de la carrera desde el principio.

No obstante, se pueden citar al menos dos consecuencias que tendrán una gran importancia para el futuro de las relaciones entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. En primer lugar, y limitándonos al ámbito de las relaciones laborales, los Sindicatos han aprendido que, en cualquier confrontación futura, cuando el Gobierno dice “nunca” es que quiere decir “podría ser”, lo que significa que los Sindicatos ya han aprendido la lección de lo que deben hacer, que puede resumirse en la frase atribuida a Camilo José Cela: “el que resiste, gana”. La segunda es que se ha dado pie a que se dude de la firmeza del Gobierno en esa o cualquier otra cuestión si se le plantea una posición de fuerza en la calle, y esto puede tener consecuencias en otros ámbitos que no tienen relación con las relaciones laborales, y que es mejor ni siquiera mencionar. Para el ciudadano, o hubo un gran error por parte del Gobierno al plantear el “decretazo”, porque desconocía o no anticipó la respuesta que darían los sindicatos, o se equivocó al asumir que no habría unidad entre los dos sindicatos mayoritarios, o ha cometido ahora un gran error al retirar su proyecto de reforma laboral, pues ha proporcionado una inyección de moral a los sindicatos que éstos habían ido perdiendo durante los últimos años, y dificulta la flexibilización del mercado laboral recomendada a España desde todos los foros económicos internacionales, incluidos los europeos.

Por el contrario, y frente a esa muestra de debilidad poco comprensible no por el contenido, sino por las formas y el tiempo, el Gobierno parece haber acertado en los modos y contenidos con que ha respondido a la nueva escalada planteada por el Gobierno de Ibarretxe con su propuesta de independencia para el País Vasco, mas o menos camuflada bajo la denominación de “estado libre asociado”. Casi todos los meses desde hace años se ha defendido en los FLASHES que en esta cuestión el Gobierno

sintoniza totalmente con la opinión pública mayoritaria, como se demuestra una vez más en los datos de La Actualidad. Los españoles, muy mayoritariamente, quieren la ilegalización de Batasuna, incluso aunque no sirva para acabar con ETA, respaldan las actuaciones del juez Garzón, rechazan la propuesta independentista de Ibarretxe y además no la conceden apenas posibilidades de llevarse a cabo, no creen que el conflicto en el País Vasco requiera del Gobierno de la Nación la adopción de medidas excepcionales, pero además no conceden apenas posibilidades a que la tensión en esa Comunidad Autónoma pueda conducir a un conflicto armado. La presión policial y judicial sobre ETA y Batasuna no está dando respiro a la banda terrorista, y la presión política y social (manifestación contra el nacionalismo obligatorio, actos públicos continuos, declaraciones de organizaciones empresariales y de empresas individuales, de universitarios, etc.) están arrinconando al terrorismo y también al nacionalismo excluyente, todo ello reforzado por una presión internacional creciente, especialmente desde la Unión Europea (y menos visible desde otros países supuestamente muy beligerantes contra el terrorismo). La contundente respuesta de la mesa de subcomisarios de la Unión Europea a la pregunta formulada por Rosa Díez, excluyendo cualquier posibilidad de que la UE acepte como miembro a un País Vasco separado de España, así como la propuesta lanzada por CiU sobre una reforma del estatuto catalán desde una plena aceptación de su pertenencia a España y con respeto a los procedimientos establecidos en la Constitución y el estatuto, podrían llevar a Ibarretxe a modificar su propuesta hacia posiciones más moderadas y que podrían ser asumidas por el Gobierno y el Parlamento Español, y que por tanto estarían enmarcadas en el ordenamiento constitucional vigente. Esa sería la única salida digna para Ibarretxe y el PNV, pues de otra parte están condenados a un fracaso político, tanto si se produce o no una confrontación más o menos violenta con el resto de España.

En el plano internacional, los acontecimientos de este último mes vuelven a poner de actualidad las relaciones con Marruecos. La opinión pública española también en este caso respalda plenamente las posiciones del Gobierno Español, especialmente en lo que respecta a mantener la exigencia de un referéndum en el Sahara y a defender la españolidad de Ceuta y Melilla. Sin embargo, es posible que la cuestión del Sahara deba ser tratada con mayor pragmatismo, y no solo desde la perspectiva de los principios. Ante todo, ese pragmatismo debe tomar nota del cambio de posición de Estados Unidos y Francia abandonando la idea de un referéndum. Un cambio de énfasis por parte de España en esa cuestión podría reforzar, además, la permanencia de España en Ceuta y Melilla. Por otra parte, la presencia de España en el Sahara y su compromiso con el Frente Polisario ha sido siempre más una cuestión de principios que de

intereses, puesto que la relación de España con el Sahara nunca fue precisamente la de una gran administración colonial. En este sentido, la escenificación del estrechamiento de relaciones con Argelia (supuestamente para dar celos a Marruecos) ha sido posiblemente demasiado obvia. Pero sí parece cierto, sin embargo, que aprovechando los cambios en el gobierno de Marruecos después de las recientes elecciones, se puedan reanudar las relaciones entre los dos países en un clima de mayor entendimiento. Desde las elecciones parece respirarse un clima de mayor entendimiento, de menor agresividad en las declaraciones verbales, de reducción de la tensión entre ambos países. Sería deseable que, si este clima continúa, se intensifiquen las relaciones de todo tipo entre ambos países. Precisamente por estas razones parece “desentonar” la amenaza que ha formulado el nuevo Delegado para la Extranjería de reducir de forma drástica el presupuesto para becas destinado a los inmigrantes marroquíes. Muy al contrario, España debería elaborar un plan ambicioso de becas y ayudas para atraer a España a los jóvenes marroquíes con el fin de educarles en España, con todas las grandes ventajas que eso conllevaría.

En cuanto al otro gran tema de la política internacional, el conflicto entre los Estados Unidos e Irak, la opinión pública española es radicalmente opuesta a la posición oficial del Gobierno Español, y censura sin paliativos el apoyo sin condiciones del Presidente Aznar al Presidente Bush. La opinión pública española atribuye mayoritariamente a los Estados Unidos la responsabilidad del incremento de las tensiones en aquella zona, igual que se responsabiliza más a Israel que a Palestina de la escalada de violencia en ese otro escenario de confrontación. Los españoles rechazan muy mayoritariamente que se lleven a cabo nuevos ataques sobre Irak, pero piensan que es bastante probable que se llegue inevitablemente a una guerra abierta en esa zona, y en ese supuesto, se rechaza también firmemente cualquier participación española en el conflicto.

Debe señalarse que la presión internacional, y de manera muy especial la presión de Francia, Rusia y China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, parecen haber producido un cierto enfriamiento de la tensión de los últimos meses, convenciendo por una parte a Irak para que aceptase la vuelta de los inspectores de Naciones Unidas, y por otra parte a Estados Unidos para que aceptasen no atacar a Irak hasta no haber recibido el informe de dichos inspectores. No obstante, esta especie de tregua verbal puede ser solo eso, la calma que precede a la tempestad. Desde hace meses se ha dicho una y otra vez que los planes de Estados Unidos eran los de atacar a Irak en enero. Cualquier incidente con los inspectores de Naciones Unidas, cualquier incumplimiento por parte de Irak durante los próximos dos meses, puede ser el pretexto necesario para desencadenar el ataque

largamente planificado sobre Irak. El gobierno de Bush ha logrado lo que quería y necesitaba, la autorización del Congreso y del Senado para atacar a Irak cuando lo estime oportuno, sujeto a condicionantes de fácil cumplimiento. El desplazamiento de la agresividad y de la atención pública desde Afganistán a Irak se ha llevado a cabo durante los últimos meses, y de nada ha servido que la CIA haya indicado que Irak no tiene todavía la bomba atómica o que no es seguro que disponga de ciertas armas de destrucción masiva. Como tampoco han servido para mucho las críticas a la administración Bush de líderes demócratas como Al Gore o el ex presidente Carter. Los intereses de las grandes compañías petrolíferas, junto con los de la industria de armamento y los del narcotráfico parecen seguir guiando los acontecimientos en Oriente Medio, como también parecen guiarlos en Venezuela y Colombia, en los Balcanes o en otros lugares del mundo. No obstante, la doctrina sobre la guerra “preventiva” o la práctica de una política internacional unilateral, adoptadas por la administración Bush, con desprecio e incluso oposición activa al Tratado de Tokio sobre protección del medio ambiente o al Tribunal Penal Internacional, al tratado internacional sobre la prohibición de torturas, etc., han debilitado aún más el prestigio y liderazgo mundial de los Estados Unidos, debilitamiento que sin embargo ha sido ampliamente compensado por su abrumador poder militar. Las críticas a Bush se han incrementado no sólo fuera de los Estados Unidos, sino sobre todo dentro de su propio país y en los diarios de mayor prestigio y circulación, con la aparente consecuencia de hacerle más proclive a aceptar que cualquier decisión debería estar avalada y propiciada por las Naciones Unidas, tesis que ha sido reiteradamente defendida por Francia, Rusia, China, Alemania y otros muchos países, entre otros por la propia España. Poco a poco parecen haberse reducido las posiciones más radicales de los “halcones” en la administración norteamericana, pero la situación puede cambiar en plazos muy breves.

Pero una vez más hay que señalar que la vieja Europa (la Unión Europea) parece incapaz de re-definir la situación en sus relaciones con Estados Unidos, relaciones que deberían ser de amistad y colaboración entre iguales, pero no jerarquizadas. La superación del escollo del referéndum en Irlanda sobre la ampliación parece dejar la vía libre para la admisión de 10 nuevos miembros en 2004, una decisión que hace ya meses era totalmente compartida por los españoles, según se informó en uno de los estudios de ASEP. Pero la ampliación de la UE, sin que se haya consolidado del todo la unidad de criterios en política exterior y de defensa o el establecimiento de una industria europea de armamento, y sin que se hayan consolidado el espacio judicial y policial común europeo, de los actuales quince miembros, puede provocar problemas importantes en el futuro.

Europa ha desarrollado un Estado de Bienestar muy amplio y socialmente solidario, pero a costa de abandonar su sistema común de defensa y seguridad. Los Estados Unidos han hecho justamente lo contrario. Pero es posible que tanto Europa como los Estados Unidos estén defendiendo modelos excesivamente extremos, y que en el medio esté la virtud, como defendía el maestro Aristóteles.

Finalmente, y en cuanto a la sucesión de Aznar, se comentó en julio que a los candidatos tradicionales a la sucesión (Rato, Mayor Oreja y Rajoy) había que añadir después de los cambios en el gobierno el pasado mes de julio a otros nuevos candidatos, como Arenas, Zaplana, Loyola de Palacio Acebes, Ruiz Gallardón, o Ana Palacio, como ya se comentó en los FLASHES de junio, y como posteriormente comentaba The Economist en un largo editorial sobre esta cuestión. Puede que esta ampliación del club de los candidatos a la sucesión explique el acuerdo hecho público hace unos días entre los tres vicesecretarios de PP antes citados y Arenas para conjuntamente proponer un candidato a Aznar (se supone que uno de los cuatro), con el compromiso de los cuatro de apoyar a dicho candidato sea quien sea. Parece como si la irrupción de Acebes y Zaplana en la carrera de la sucesión hubiese despertado recelos en los “delfines tradicionales”. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el poder pocas veces se hereda (excepto en las monarquías) sino que se gana, como lo ganó Aznar apoyado por el clan de Valladolid frente a los deseos del entonces presidente del PP, Manuel Fraga, cuyas preferencias se centraban en Isabel Tocino. Ni Carrero Blanco sucedió a Franco (sobre todo porque murió antes que él), ni Abril ni ninguno de los otros delfines sucedió a Suárez, ni Guerra ni Almunia sucedieron a González, y no puede descartar que el sucesor de Aznar no sea nadie nombrado desde arriba, sino alguien que “pelee” y tenga éxito en hacerse con el poder dentro del PP, alguien que empuje, como ya están empujando Ruiz Gallardón, Zaplana y Acebes por lograr una buena posición en la parrilla de salida. En otras palabras, en las democracias el poder no se hereda, se conquista, y existen muy diversas formas de “conquistar” el poder dentro de un partido desde la legalidad democrática.

En todo caso, la opinión pública española no cree que, frente a ciertos comentarios aparecidos recientemente en los medios de comunicación, Aznar deba reconsiderar su decisión de no presentarse como candidato a las próximas elecciones. Por el contrario, la opinión pública estima mayoritariamente que debe cumplir su palabra y no presentarse.

Este mes, como luego se comenta, el PP incrementa su ventaja sobre el PSOE hasta cuatro puntos y medio, con una abstención estimada no muy distinta de la realmente observada en las elecciones generales del 2000. Si esta ventaja se mantuviese el PP ganaría las elecciones, pero no necesariamente por mayoría absoluta (la diferencia en las elecciones del 2000 fue de siete puntos y medio). Pero queda un año y medio hasta las elecciones, por lo menos, y en ese tiempo hay de por medio unas elecciones autonómicas y municipales, y pueden ocurrir un sinfín de cosas.

EL CLIMA DE OPINIÓN

Con el fin de aclarar diversas consultas recibidas en ASEP sobre la fecha en que se realizan las entrevistas de cada sondeo y la de otros institutos de opinión, ASEP desea aclarar que el avance de resultados llega a sus clientes a la semana de haber finalizado las entrevistas, y el informe completo sobre La Opinión Pública de los Españoles, los Flashes, y en su caso el informe sobre Liderazgo Corporativo, llega a los clientes a las dos semanas (e incluso antes) de haber finalizado el trabajo de campo. Otros institutos publican sus resultados con plazos más largos. Concretamente, el sondeo ASEP de este mes se entrega a los clientes el jueves 24 de octubre, cuando las entrevistas fueron realizadas entre el 7 y el 12 de octubre.

La casi totalidad de los indicadores este mes vuelve a experimentar un nuevo descenso respecto a los del mes precedente. Así, los dos indicadores principales relativos a la situación económica nacional, el Sentimiento del Consumidor y la Evaluación de la Situación Económica vuelven a disminuir este mes (tres puntos en ambos casos), alcanzando una vez más los niveles más bajos de los últimos años, estando en ambos casos significativamente por debajo del nivel de equilibrio (16 y 27 puntos, respectivamente, por debajo de dicho nivel). Puede, por tanto, afirmarse que los españoles siguen estando muy preocupados por la situación económica nacional y por su propia situación económica personal. Los dos indicadores de ahorro se sitúan igualmente en los valores más bajos de los últimos doce meses e incluso de los últimos años, hasta el punto de que la propensión al ahorro está por debajo del nivel 130 (en una escala de 0 a 200), un nivel que no se había traspasado desde hace muchos años, y que sugiere que, aunque los que ahorran superan a los que se endeudan, la proporción de los que ahorran algo está disminuyendo de manera muy significativa. Esta proporción ha sido del 38% de los entrevistados en los dos últimos sondeos, los de septiembre y octubre. Debe tenerse en cuenta, además, que este indicador mide solo la proporción de los que ahorran, pero no dice nada respecto al volumen de ahorro de los que ahorran, aunque ciertos indicadores procedentes de las entidades financieras mismas

parecen indicar que el volumen de los ahorros ha disminuido aún más drásticamente.

El Optimismo Personal, que mide la confianza y satisfacción con la propia situación económica personal y su evolución previsible, pierde dos puntos respecto al mes pasado, vuelve a situarse, por octavo mes consecutivo, por debajo del nivel de equilibrio, y alcanza también su valor más bajo de los últimos años (11 puntos por debajo del nivel de equilibrio). La proporción de post-materialistas, que se había mantenido en el nivel del 40% y más durante casi todo el año 2001, y que todavía en marzo de este año logró llegar a esa cota del 40%, alcanza este mes un 35%, que sugiere que los españoles se preocupan otra vez crecientemente por los aspectos materiales (seguridad económica y seguridad personal) de su vida, más que por otros valores que generalmente se conocen como post-materialistas.

En cuanto a los indicadores políticos, la Satisfacción con el funcionamiento de la Democracia disminuye este mes en cuatro puntos respecto al mes pasado, aunque sigue en un nivel muy alto que contrasta con el pesimismo o insatisfacción en otros ámbitos. Pero la Satisfacción con el Gobierno continúa este mes en el nivel de equilibrio en que se encuentra desde hace dos meses (101 este mes, 100 en septiembre y 99 el mes de julio), indicando que la proporción de personas que están satisfechos con la labor del Gobierno es más o menos igual que la de los insatisfechos, pero su valor es el tercero más bajo de los últimos doce meses. La exposición a la información sigue también en un nivel próximo al de equilibrio. En cuanto a los indicadores relativos a la Unión Europea, todos ellos muestran valores casi idénticos a los de los meses precedentes, con valores bastante altos que indican una clara satisfacción por pertenecer a la UE y una indiscutible percepción de beneficios (más que de perjuicios) para España, para la Comunidad Autónoma y para el propio entrevistado derivados de esa pertenencia. La persistencia de estos valores indica que las actitudes de los españoles hacia la Unión Europea están muy consolidadas, al menos de momento.

La imagen de instituciones y líderes se ve también afectada por el clima de pesimismo e insatisfacción que parece persistir desde hace ya meses. No obstante, el efecto parece ser menor este mes sobre las instituciones que sobre los líderes, de manera que tres de las instituciones fijas obtienen valoraciones algo más altas que en septiembre (las Fuerzas Armadas, La Corona y los Bancos), mientras que el Gobierno de la Nación reduce su valoración en una décima.

El ranking de este mes es el siguiente: La Corona (6,5 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), la Policía Nacional (6,1), la Guardia Civil (6,0), las Fuerzas Armadas (5,8), el Gobierno de la Nación y los Bancos (4,7 en ambos casos), y los Tribunales de Justicia (4,6 puntos).

En cuanto a la valoración de líderes políticos, empeora levemente la imagen de tres de los cuatro líderes fijos, y sólo aumenta ligeramente también la de Felipe González. Este mes se ha preguntado por la imagen de tres líderes europeos, Blair, Berlusconi y Schröder, habiéndose comprobado que la valoración de los líderes británico y alemán es significativamente más alta que la del líder italiano, Berlusconi, aunque la más baja es sin duda la del Presidente de los EEUU, George Bush.

El ranking de este mes es el siguiente: La Reina D^a Sofía (7,1 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González (5,1 puntos cada uno), José M^a Aznar (4,6), Gerard Schröder (4,1), Tony Blair (4,0), Gaspar Llamazares (3,9), Silvio Berlusconi (3,2) y George Bush (2,9 puntos). Debe resaltarse que la valoración de Bush ha disminuido significativamente desde 3,8 puntos en diciembre del 2001 a 3,1 en abril del 2002, y a 2,9 puntos ahora en octubre.

La intención de voto este mes vuelve a dar una ligera ventaja de cuatro y medio puntos porcentuales al PP sobre el PSOE en la estimación de voto, (dos puntos y medio menos de diferencia que en las elecciones del 2000), con una abstención de un punto y medio inferior a la realmente observada en las elecciones del 2000. En la introducción de estos FLASHES se ha ofrecido ya un intento de explicación de por qué el PP mantiene una ventaja sobre el PSOE a pesar de que la mayoría de los datos sugerirían lo contrario, y por ello no se repite aquí la argumentación.

LA ACTUALIDAD

Los temas que parecen haber acaparado la atención de los medios de comunicación durante el mes anterior a las entrevistas de este mes, y que por tanto son los que posiblemente hayan obtenido una mayor atención también por parte de la opinión pública española, han sido el proyecto de independencia para el País Vasco propuesto por Ibarretxe, las relaciones de España con Marruecos, la continuación de los planes del gobierno Bush para atacar a Irak, la relación de España con otros países de la Unión Europea, y ya en el plano nacional, los “errores” de algunos recibos de consumo por servicios en el hogar, las inversiones en Bolsa y la posibilidad de que Aznar reconsidere su decisión de no presentarse como candidato a las elecciones del 2004.

El Plan Ibarretxe para la Independencia del País Vasco

El proceso de ilegalización de Batasuna, en lugar de servir para acercar al PNV hacia las posiciones de los partidos denominados constitucionalistas (PP y PSOE), parece haberle radicalizado aún más, llevándole a asumir los planteamientos más soberanistas e independentistas de Batasuna, y a identificarse más con los fines (no necesariamente con los medios) de ETA. En efecto, la propuesta formulada por Ibarretxe en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca de celebrar un referéndum en fecha no determinada pero tampoco lejana sobre la independencia de esa Comunidad respecto al resto de España, ha constituido la apuesta más radical conocida hasta ahora, y supone un escalamiento en las tensiones ya de por sí tirantes entre el Gobierno de esa Comunidad y el Gobierno de la Nación.

En ese contexto, se preguntó a los entrevistados cuál de los dos gobiernos, el de Ibarretxe o el de Aznar, tenían más responsabilidad en el incremento de las tensiones. Pues bien, prácticamente la mitad de los entrevistados atribuyen más responsabilidad al gobierno de Ibarretxe, mientras que solo un 11% se la atribuyen al gobierno de Aznar, pero un 22% se la atribuyeron (espontáneamente, puesto que era una respuesta no sugerida como las anteriores) a ambos gobiernos, otro 2% no la atribuye a ninguno de los dos, y el 16% restante no contestó a la pregunta.

Solo un 14% de los entrevistados creen que la ilegalización de Batasuna servirá para acabar con ETA, mientras que un 47% piensan que no servirá para ese propósito, pero un 24% contestaron espontáneamente (puesto que no era una pregunta sugerida) que “puede que no sirva para acabar con ETA, pero había que hacerlo”, y un 15% no contestó a la pregunta.

A pesar de lo anterior, y precisamente en consonancia con la respuesta no sugerida de que había que hacerlo aunque no sirva para acabar con ETA, un 58% de los entrevistados afirman estar de acuerdo con la ilegalización de Batasuna, frente a solo un 21% que están en desacuerdo, y un 22% que dicen carecer de suficiente información o simplemente no contestaron.

Por otra parte, un 47% de los entrevistados creen que el terrorismo ha perjudicado al nacionalismo del PNV, frente a sólo un 12% que piensan que le ha beneficiado y un 21% que creen que ni le ha beneficiado ni le ha perjudicado. Uno de cada cinco entrevistados no contestó a la pregunta.

Una clara mayoría de los entrevistados (59%) afirman estar en desacuerdo con el objetivo de lograr la independencia del País Vasco respecto a

España, y sólo un 13% están de acuerdo con ese objetivo, pero un 27% dicen no tener información suficiente o simplemente no opinan.

No obstante, y con independencia de las preferencias, hay un consenso aún mayor en creer que la independencia del País Vasco no es en absoluto posible (30%) o que es poco posible (44%), frente a sólo un 6% que piensan que es bastante o totalmente posible y un 21% que dicen no tener suficiente información para opinar o simplemente no opinan.

Pero, en el supuesto de que el gobierno Vasco continúe esta escalada y adopte decisiones tendentes a la desobediencia al Gobierno de la Nación y a favor de la independencia, casi la mitad de los entrevistados (41%) opinan que el Gobierno de la Nación “debe adoptar solo medidas legales a través de los Tribunales de Justicia”, pero sólo un 6% opinan que debería recuperar algunas de las competencias ya transferidas al gobierno Vasco, un 3% creen que debería tomar el mando de la Ertzainza, un 2% dicen que debería declarar el estado de excepción en esa Comunidad Autónoma, y un 6% creen que debería enviar al País Vasco más Fuerzas de Seguridad del Estado y, en su caso, a las Fuerzas Armadas. Pero un 19% de los entrevistados opinan que el Gobierno de la Nación no debería hacer nada en esa situación, para no caer en la provocación, y un 24% no opinan en absoluto sobre esta cuestión.

Finalmente, casi uno de cada cuatro entrevistados (23%) opinan que no existe ninguna posibilidad de que el conflicto vasco aumente y se llegue a un conflicto armado entre sectores independentistas y el Gobierno de la Nación, y un 47% adicional estiman que las posibilidades son pocas. Por el contrario, sólo un 12% de los entrevistados creen que hay bastantes posibilidades de que la escalada conduzca a un conflicto armado, y un 1% adicional creen que existen muchas posibilidades de que eso ocurra. El 17% restante de los entrevistados no opinaron sobre la cuestión.

El Conflicto con Marruecos

Las relaciones ente España y Marruecos continúan en un cierto compás de espera, después de que el Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos no acudiese a la reunión que tenía concertada con la Ministra española, Ana Palacio. No obstante, y como era de esperar, el resultado de las elecciones en Marruecos ha provocado cambios en el gobierno de aquel país que afectan al titular de Exteriores, y no solo al Primer Ministro, por lo que el Gobierno Español abriga esperanzas de que las relaciones mejoren, a pesar de las declaraciones a veces mas subidas de tono de lo que sería deseable para restablecer las relaciones entre ambos países. En ese sentido, el

mensaje enviado por el Rey de Marruecos al Rey de España con motivo de la fiesta nacional del 12 de octubre parece también incluir un cierto tono de deseos de relajar las tensiones y buscar algún tipo de acuerdo.

La mitad de los españoles (54%) atribuyen a Marruecos la responsabilidad del aumento de tensiones entre Marruecos y España, frente a solo un 5% que se la atribuyen a España, pero un 24% y un 2% creen (mediante respuestas espontáneas, no sugeridas) que la responsabilidad es respectivamente de los dos países o de ninguno, y sólo un 15% dejó de opinar sobre esta cuestión.

Como en septiembre, los españoles atribuyen de forma espontánea y mayoritariamente (43% en septiembre y 38% ahora) a la inmigración la causa principal de los conflictos y tensiones entre Marruecos y España, y proporciones siempre inferiores al 10% se la atribuyen a otros factores, que de mayor a menor frecuencia de menciones pueden relacionarse así: las diferencias en materia de democracia y libertades, el Sahara, las diferencias de religión, el tráfico de drogas, la competencia en productos agrícolas, la competencia en materia turística y otras razones. Un 19% de los entrevistados no contestó en absoluto respecto a las causas de estos conflictos y tensiones.

La opinión pública española respalda de forma bastante clara y firme la política exterior española respecto a Marruecos. Así, mediante un conjunto de frases respecto a las cuales los entrevistados debían mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo sobre la base de una escala de 5 puntos, se observa un alto grado de acuerdo respecto a la afirmación de que “España debe continuar exigiendo el referéndum en el Sahara” y respecto a que “España debe imponer sanciones económicas a Marruecos si continúa con su actitud actual hacia España”. El acuerdo es moderado respecto a que “España debe defender Ceuta y Melilla incluso por la fuerza de las armas” y a que “España debe cooperar más con Marruecos”. Pero existe un fuerte desacuerdo con que “España debe permitir que el Sahara sea parte de Marruecos” y con la afirmación de que “España debe renunciar a Ceuta y Melilla”.

En relación con algunas de estas cuestiones, puede también observarse que, utilizando una escala similar de cinco puntos para medir el grado de posibilidad de que sucedan ciertos acontecimientos en los próximos meses, los españoles consideran muy poco posible en este próximo futuro “El traspaso de Ceuta y Melilla a Marruecos” o “Una guerra entre Marruecos y España”, pero hay un mayor equilibrio de opiniones entre quienes ven

posible y quienes no ven posible la celebración de un referéndum en el Sahara”.

La cautela, sin embargo, parece presidir las opiniones sobre cómo evolucionarán las relaciones entre estos dos países después de las elecciones recientemente celebradas en Marruecos. Así, un 45% de los entrevistados afirman carecer de información para opinar sobre esta cuestión, y un 19% adicional no contesta en absoluto a la pregunta. Y los que creen que las relaciones entre los dos países empeorarán (17%) constituyen una proporción muy similar a la de quienes creen que las relaciones mejorarán (19%).

El Conflicto entre Estados Unidos e Irak

Desde hace meses, y una vez concluida (¿?) la intervención militar en Afganistán, Estados Unidos ha iniciado una presión internacional intensa y continuada, especialmente sobre sus aliados de la Unión Europea, para iniciar otra guerra en Irak.

En primer lugar, debe indicarse que un tercio de los entrevistados (32%) opinan que Estados Unidos es el principal responsable de las tensiones que existen actualmente entre este país e Irak, mientras que una quinta parte (20%) responsabilizan a Irak de esa situación. Un 32% de los entrevistados, sin embargo, responden espontáneamente que ambos países son igualmente responsables de la situación creada, mientras que un 1% que ninguno de los dos países tiene responsabilidad y un 15% adicional no contesta en absoluto a la pregunta.

Preguntados por las condiciones en que se debería atacar a Irak, casi la mitad de los entrevistados (44%) afirman espontáneamente que no se debe atacar a Irak en ningún caso, un resultado no frecuente, ya que solo un 37% de los entrevistados eligió alguna de las dos respuestas sugeridas, la inmensa mayoría de ellos (32%) en el sentido de que “se debe atacar a Irak si este país se niega a aceptar inspectores, y bajo mandato de la ONU”, y una pequeña minoría (5%) en el sentido de que “se debe atacar a Irak de forma inmediata, para evitar que pueda atacar a otros países”. El 19% restante no opinó en absoluto sobre esta cuestión. En otras palabras, solo un 5% de los entrevistados parecen justificar un “ataque preventivo”, que parece ser la nueva filosofía de las relaciones internacionales propugnada por la administración Bush.

Coherentemente con este rechazo general al inicio de una nueva guerra contra Irak, y de manera especial a la “guerra preventiva”, la mayoría de

los españoles (58%) afirman estar en desacuerdo con la decisión de Aznar de apoyar incondicionalmente a Bush en su disposición a atacar a Irak incluso aunque no exista mandato de la ONU, frente a solo un 16% que dicen estar de acuerdo con la decisión de Aznar. Pero un 15% de los entrevistados afirman no tener suficiente información para opinar, y el 12% restante no opinó en absoluto.

Por otra parte, y a diferencia de lo que se ha señalado respecto a la posible evolución de los conflictos en el País Vasco y en Marruecos, los entrevistados consideran bastante probable que se inicie una guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irak. Concretamente, un 59% estiman que hay muchas o bastantes posibilidades, frente a un 26% que creen que hay pocas o ninguna posibilidad de que eso ocurra. El 15% restante no opinó sobre esta cuestión.

Pero en el supuesto de que esa guerra se inicie realmente, el 59% de los españoles de 18 y más años opinan que España no debería intervenir en absoluto, frente a un 5% que opinan que España debería enviar tropas para ayudar a Estados Unidos y sus aliados contra Irak, y un 19% que creen que España debe ayudar a Estados Unidos pero sin participar directamente en la guerra. Resulta también curioso señalar que un 2% de los entrevistados opinan que España debería ayudar a Irak pero sin participar directamente en la guerra, y un 1% que opinan que España debería enviar tropas para ayudar a Irak contra Estados Unidos y sus aliados. Solo el 14% de los entrevistados no opinó sobre esta cuestión.

Las Relaciones de España con otros países de la Unión Europea

Los medios de comunicación se han referido desde hace años a los posibles grupos de países que se constituían dentro de la Unión Europea, y durante mucho tiempo se vinculó a España con el eje Francia-Alemania (y en cierto modo sustituyendo a Italia, algo “descolgada” de ese grupo por sus problemas internos). Este sería el grupo “duro” o “motor” de la construcción europea, según se afirmó en dichos medios durante mucho tiempo. Desde hace algunos años, sin embargo, la amistad entre Aznar y Blair, y más recientemente entre ambos con Berlusconi, parece haber constituido un nuevo grupo tripartito (Reino Unido, Italia y España), que en cierto modo habría tomado el testigo de ser el nuevo “motor” de Europa frente a Francia y Alemania.

Lo cierto es que, como ya se observó en abril, una mayoría de españoles (31%) creen que España debería dar su apoyo al grupo liderado por Francia y Alemania, mientras que solo una minoría (14%) opina que debería dar su

apoyo al grupo formado por Reino Unido e Italia. Pero un 15% de los entrevistados opina que España no debería dar su apoyo a ningún grupo, y el 40% no opina en absoluto.

Ahora, en octubre, se ha preguntado además con qué grupo creen los entrevistados que está mejor relacionado el Gobierno de Aznar, habiéndose observado que una mayoría (28%) creen que está mejor relacionado con Gran Bretaña e Italia, mientras que la minoría (18%) cree que está mejor relacionado con Francia y Alemania. Además, un 10% creen que España no está relacionada con ningún grupo, y un 44% no contesta a la pregunta. En otras palabras, la opinión mayoritaria parece ser la de que España debería entenderse mejor con Francia y Alemania, pero que está mejor relacionada con Gran Bretaña e Italia.

“Errores” en los recibos de consumo

No es en absoluto infrecuente oír las quejas de algún ciudadano en el sentido de que le han cargado en su cuenta bancaria, o le han pasado al cobro, algún recibo por servicios de consumo en el hogar (agua, luz, gas, teléfono) por cuantías totalmente desproporcionadas respecto a lo que habitualmente paga por ese servicio. Esas noticias, aunque minoritarias, plantean la duda de cuál es realmente su frecuencia. Por ello se ha preguntado este mes a los entrevistados si les ha ocurrido esto alguna vez, y cómo han resuelto el problema.

Como se esperaba, la incidencia de estos “errores” es muy pequeña en el caso del agua y el gas, puesto que solo un 5% y un 2% respectivamente afirman haber pasado por esa desagradable experiencia. Sin embargo, la incidencia de recibir facturas muy elevadas y no correctas por el suministro de luz y teléfono parecen más frecuentes, ya que alrededor de un 10% de los entrevistados afirman haber sufrido esa experiencia. Teniendo en cuenta que el número de hogares en España es de alrededor de 7 millones, el hecho de que 700.000 hayan tenido tan desagradable experiencia parece merecer alguna atención.

Pero, como ya se ha dicho, aparte de tener algún conocimiento algo más preciso del grado de incidencia de esta experiencia, interesaba saber cómo había resuelto el entrevistado este problema.

Pues bien, en el caso de los pocos entrevistados (24) que afirman haber recibido un recibo “abultado” del gas, dos de cada tres afirman que lo pagaron pero que más tarde se lo devolvieron, y algo más de uno de cada diez dice que no tuvo que pagarlo porque lo protestó antes de pagarlo. Pero

uno de cada cinco afirma que no tuvo más remedio que pagarlo, y por lo que parece no fue reintegrado de ese pago.

Sin embargo, de los 64 entrevistados que afirman haber tenido esa experiencia con el recibo del agua, algo menos de la mitad afirman que no tuvieron más remedio que pagarlo, sin ser reintegrados posteriormente, y la otra mitad se dividen más o menos por igual entre los que no pagaron porque protestaron antes y los que pagaron y luego fueron reintegrados de su pago.

De los 120 que afirman haber recibido facturas “exageradas” de teléfono, la mitad dicen que no tuvieron más remedio que pagarlo, y de la otra mitad, dos tercios pagaron y luego fueron reintegrados, y un tercio no pagaron porque protestaron antes.

Y, finalmente, la peor solución parece observarse respecto a los recibos de la luz, pues de los 129 entrevistados que dicen haber recibido facturas indebidas, algo más de la mitad afirman que no tuvieron más remedio que pagarlo, y sólo un tercio dicen lo pagaron y luego fueron reintegrados, y el pequeño número restante se divide más o menos por igual entre los que no pagaron porque protestaron antes y los que no contestaron en absoluto.

La Crisis de la Bolsa

Un 13% de los entrevistados afirma tener inversiones en Bolsa, algo más en planes de pensiones (4%) que en fondos de inversión privados (3%), y por supuesto que en fondos de inversión públicos (1%), si bien un 4% de los entrevistados no contestaron.

Aunque la muestra de quienes tienen inversiones es pequeña (solo 97 entrevistados), los datos sugieren que sólo una pequeña minoría ha sufrido realmente pérdidas, ya que ha vendido en un momento en que la Bolsa está en niveles muy bajos, pero dos tercios dicen que, aunque sus inversiones están perdiendo valor, en realidad no han perdido porque no han vendido (y por tanto no han experimentado pérdidas). Incluso algo más de uno de cada diez inversores afirman haber ganado algo, puesto que han comprado barato al estar tan baja la Bolsa. No obstante, uno de cada cinco inversores no contestó a esta pregunta.

La Candidatura de Aznar

Como consecuencia de los conflictos en el País Vasco y las relaciones conflictivas con Marruecos, algunos medios de comunicación comenzaron

a plantear la hipótesis de que si, estos conflictos empeorasen, Aznar debería reconsiderar su decisión de no presentarse como candidato a las próximas elecciones generales del 2004. Por ello pareció conveniente preguntar la opinión de los entrevistados sobre esta cuestión.

Más de la mitad de los entrevistados (52%) afirma que Aznar debe mantener su decisión de no presentarse a las elecciones, pero un 18% cree que debería reconsiderar su decisión y presentarse como candidato del PP en las próximas elecciones, y un 10% adicional afirma (espontáneamente, sin sugerencia alguna) que depende de cómo evolucionen los acontecimientos. El 21% restante de entrevistados no contestó a esta pregunta.